

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-4714-2021
CARATULADO	: EITEL / FISCO/CONSEJO

Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, comparece don PABLO UBILLA EITEL, abogado, domiciliado en calle Seminario N°33, departamento N°104, comuna de Providencia y don MANUEL UBILLA EITEL, abogado, domiciliado en pasaje Tanumé 7459, torre C, departamento 102, comuna de Ñuñoa, en representación de doña **KARIN ALICIA EITEL VILLAR**, cédula nacional de identidad número 9.150.751-k, domiciliada en calle Antupirén 7968, comuna de Peñalolén, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado- en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, domiciliado en calle Agustinas N°1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago.

Señala, en síntesis, que la parte demandada se ha visto forzada a reconocer en distintos escenarios los vergonzosos y horrorosos ilícitos que fueron cometidos en contra de la dignidad humana durante la dictadura militar, por ejemplo, en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, siendo actualmente una verdad oficial la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en contra de la población por parte de agentes estatales entre los años 1973 y 1990. En este marco, doña Karin Alicia Eitel Villar, se encuentra registrada oficialmente en el Informe de la Comisión Nacional sobre



Foja: 1

Prisión Política y Tortura en la nómina como víctima calificada, con la numeración N°7664.

Relatan que el 1 de septiembre del año 1987 se produjo el secuestro al oficial del Ejército coronel Carlos Carreño Barrera, por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde desde un principio se tomó la decisión de resguardar, a toda costa, la vida de ese Oficial, incluso sacándolo del país, ya que existió fundado temor de que sus propios camaradas de armas o integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) le diesen muerte, si lo encontraban en territorio nacional.

En ese contexto y circunstancias, doña Karin Alicia Eitel Villar refiere que como militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez aceptó ser vocera de la organización, correspondiéndole recoger información, en lugares y horarios preestablecidos, para hacerla llegar personalmente o por vía telefónica a los negociadores y a los medios de comunicación, respectivamente; todo ello de manera clandestina y pacífica, sin portar jamás armas, ni proferir amenaza o insulto alguno.

Indica doña Karin Alicia Eitel Villar que al poco tiempo de acometidos supo del secuestro de Alejandro Pinochet Arenas y los otros militantes comunistas en el mes de septiembre de 1987, lo que evidentemente asociaron a una represalia de los organismos de inteligencia por el caso del coronel Carlos Carreño. Posteriormente, en el transcurso de las semanas se percató que se dieron situaciones extrañas, pero se negó a creer que iba ser detenida y no estaba dispuesta a dejar las comunicaciones abandonadas, ya que entendió que colaboraba con el pronto término de la situación del coronel Carreño.

Cuenta que el día 2 de noviembre del año 1987, en horas de la madrugada, mientras se encontraba durmiendo en una casa de la calle Charles Hamilton, comuna de Las Condes, un numeroso grupo de civiles que no se identificaron, ni exhibieron orden alguna, con participación directa de agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y de la CNI, ingresaron armados a dicha morada, algunos de ellos encapuchados, los que violentamente la maniataron, insultaron, amenazaron y sin más la subieron, con la vista vendada, al interior de un vehículo y de allí, siempre en medio de malos tratos, a un subterráneo del Cuartel Borgoño de la CNI. En ese recinto



Foja: 1

el primer acto fue desnudarla completamente, siempre con la vista vendada, y golpearla sostenidamente, en todo el cuerpo, en particular en la cara. Los golpes no pararon, las groserías, amenazas y manoseos tampoco, fue un tiempo indeterminado, luego la ingresaron a una celda. En este recinto estuvo varios días, siendo llevada por lo general en horas de la tarde o noche a un recinto de la Policía de Investigaciones de avenida Macul, donde no fue apremiada, y en distintos horarios regresada al Cuartel Borgoño.

Expone que en el Cuartel Borgoño permaneció gran parte del tiempo con la vista vendada, fue reiteradamente interrogada y torturada, física y psicológicamente, con amenazas de diversa índole. Allí pudo identificar claramente dos grupos de agentes que la interrogaban, uno que se caracterizaba por un lenguaje soez, donde le impresionaba el hálito alcohólico de uno de ellos; el otro grupo lo identifica como agentes de mayor preparación, oficiales seguramente, con lenguaje distinto, y sus interrogatorios estaban orientados parcialmente a saber sobre el paradero del Coronel Carlos Carreño, centrando sus preguntas en conocer nombres de militantes y estructura del FPMR, para lo que incluso contaban con varias fotografías y organigrama de la organización. Este grupo, que contaba con mayor información, no por ello fue menos violentos en los golpes.

Agrega que en una oportunidad, mientras los agentes pretendían saber nombres de frentistas, uno de los interrogadores, en inequívoca amenaza y alusión a los cinco detenidos desaparecidos del año 1987, le dijo que si no colaboraba le pasaría lo mismo que a los cinco, preguntándole en tono irónico si sabía lo que les había pasado a estos. Mientras que en otra ocasión, siempre en Borgoño, mientras se encontraba excepcionalmente sin venda y de espaldas a un dibujante, dando señas para un retrato hablado, ingresó una mujer que le hizo una pregunta y ante su respuesta y el giro de su cabeza la golpeó duramente, mediando insultos, por lo que reconoció su cara y su voz como una de las personas que estuvo presente en uno de los interrogatorios.

Señala doña Karin Alicia Eitel Villar que los traslados entre el cuartel de la policía civil y el de calle Borgoño eran efectuados usualmente por los mismos individuos. Estando en el recinto de la Policía de Investigaciones, repentinamente se apersonaron en su celda dos hombres, a los que por su voz



Foja: 1

reconoció, lejos de toda duda, como interrogadores (evidentemente torturadores) en el Cuartel Borgoño. Ella estaba dada vuelta para la pared y uno de ellos le dijo “date vuelta y grábate bien nuestra cara para que les cuentes a tus amigos”, a este último lo reconoció como Ricardo Ortega cuando su fotografía fue publicada por la prensa y posteriormente al exhibírsele otra en sede judicial.

Refiere que estando muy torturada y tras ser maquillada por los agentes del Cuartel Borgoño, fue obligada a hablar ante una cámara de televisión acusando falsamente al abogado don José Galiano de ser colaborador del FPMR y otras aseveraciones que corresponden a la edición de un interrogatorio con intervalos de golpes. Esta grabación ha sido emitida sin su consentimiento en distintas ocasiones por Televisión Nacional de Chile luego de la liberación del coronel Carreño.

Cuenta que, finalmente, fue llevada a presencia del entonces Fiscal Militar Ad-Hoc Carlos Donoso, que reemplazaba al Fiscal Fernando Torres Silva, a quien le denunció las torturas y nada hizo, salvo ordenar reiteradas incomunicaciones y tratar de que inculpase al abogado José Galiano en el caso. Durante la incomunicación, que duró 35 días, fue llevada todas las jornadas a los recintos de la Fiscalía y hostigada sistemáticamente en el vehículo de Gendarmería, en las escaleras, debiendo permanecer de pie por largas horas, entre otras.

Recuerda que durante varios días no podía ni abrir ni cerrar la boca, porque las articulaciones de mandíbula y oídos las tenía paralizadas. La rigidez en la zona de la columna y las cervicales le desesperaba. El dolor de cabeza no desaparecía y también le dolían las heridas en el cráneo por donde supuraba una secreción muy fea. En ese contexto de tanto dolor corporal, un día la visita una amiga a quien le dice que llevaba muchos días sin dormir, por lo que ella le entrega una pastilla que sería el primero de muchos ansiolíticos que tomaría durante el resto de su vida.

Manifiesta que recuperó la libertad el 2 de agosto de 1991, es decir, estuvo 3 años y 9 meses privada de ella; sin embargo, el sufrimiento que le provocó la experiencia del secuestro, tortura y prisión política aún no termina. Desde entonces se ha sometido a numerosos tratamientos psicológicos y



Foja: 1

siquiátricos para superar la depresión y el insomnio. No ha sido menor la cantidad de fármacos, tales como anti-depresivos, ansiolíticos y somníferos, que ha consumido durante estas últimas tres décadas, con la finalidad de acallar el dolor pero sin éxito. La verdad es que ha tenido que aprender a convivir con él. La rabia y la impotencia que le provoca que no se haya hecho justicia sin duda también es un factor importante de sus pesares.

Por otro lado, cuenta que se ha visto forzada a recordar los hechos cada vez que ve en la televisión abierta la transmisión de la declaración que hizo bajo tortura, reproducciones que nunca han contado con su consentimiento. Incluso cuando no la ve y simplemente recuerda que pueden estar siendo transmitidas, el sentimiento de vulnerabilidad y atropello de sus derechos regresa.

En cuanto al Derecho, se indica que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como “crímenes de lesa humanidad”, según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre, ambas de 1946, y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998, crímenes que han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuya identificación resulta fundamental para resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el caso de autos, encontrándose la reparación de los crímenes de lesa humanidad regulada por normas y principios propios del derecho internacional.

Invoca los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como también el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la república que sanciona e incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie.

Alega que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango



Foja: 1

constitucional, supraconstitucional y también legal, todas las cuales son normas propias del ámbito del Derecho Público, mencionando además los artículos 1 inciso cuarto, 6, 7 y 38 de la Carta Magna, normas que establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, y conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad que emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Expone además que la correcta resolución del caso sub-lite requiere la aplicación armónica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Humanitario y el Derecho Público, siendo improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los del Derecho Público, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de Derecho Privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos constitutivos de delitos de lesa humanidad, ya que, ambos difieren en su naturaleza y fines, concluyendo que al reconocer que los crímenes de lesa humanidad se encuentran regulados según normas de carácter público e internacional por sobre el Derecho Privado, es posible afirmar la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Asevera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha convención, y si bien es cierto en ninguna disposición de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar e integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Concluye que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona



Foja: 1

que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales.

Menciona del trauma sicológico que significó la tortura y prisión política, que se ha sometido a durante treinta años y de forma ininterrumpida a diversos tratamientos de índole sicológica y siquiátrica, debiendo costear los honorarios de distintos profesionales, además de los fármacos prescritos por ellos considerando tales costos como daño emergente, así como también los episodios prolongados de tortura, los cuales superaron un mes y fueron objeto de múltiples acciones judiciales para hacerlas cesar, y más de 3 años de prisión política, teniendo a esa fecha 26 años, encontrándose estudiando Idiomas en la Universidad Católica, proyecto de vida que se vio bruscamente interrumpido para nunca volver a ser retomado, circunstancias deben ser consideradas al momento de determinar el monto de la indemnización por daño moral, pues han sido determinantes durante toda su vida, exponiendo además como grave vulneración a la vida privada que importa la grabación y exposición, en diversos medios de comunicación masivos, sin consentimiento, de interrogatorios efectuados por agentes del Estado.

Previas citas legales, solicita se condene a la demandada por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos), consistente el \$100.000.000 (cien millones de pesos) por daño emergente y \$ \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) por daño moral, o bien en su defecto, a la suma que el tribunal considere en justicia, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

A folio 15, con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se notificó la demanda.

A folio 16, con fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, comparece doña RUTH ISRAEL LÓPEZ, cédula nacional de identidad número



Foja: 1

9.772.243-9, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4°, comuna de Santiago, contestando la demanda de autos, solicitando el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por doña Karin Alicia Eitel Villar, en su calidad de víctima de detención, tortura y apremios ilegítimos, en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, alegando la improcedencia de la indemnización solicitada por haber sido ya indemnizada la demandante, alegando que la Ley N° 19.123, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, han establecido distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a familiares directos de éstas, mediante tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas. Explica que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Luego, analiza cada una de estas compensaciones, señalando, respecto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, que en término de costos generales para el Estado de Chile, este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, un desembolso total de \$992.084.910.400, que corresponden a las siguientes indemnizaciones: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.

Indica que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y 19.992, y sus respectivas modificaciones, estableciendo esta última una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor



Foja: 1

de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, consigna que la actora recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios o superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, refiere que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, destacando la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.



Foja: 1

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto de indemnizaciones acordes a nuestra realidad económica, que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.

Así las cosas, estima que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos; de esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente, por lo que, estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante de la presente causa.

En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Ello por cuanto del relato de la actora la detención ilegal y tortura que sufrió ocurrieron desde el día 2 de noviembre de 1987 hasta el 2 de agosto de 1991, en circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte con fecha 38 de julio de 2021, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la dictadura militar.

En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, por cuanto entre la fecha en que se habría hecho exigible el



Foja: 1

derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Expone que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, siendo la prescripción una institución universal y de orden público, donde las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado.

Indica que ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Convención Americana de Derechos Humanos.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En tercer término, en cuanto al daño e indemnización reclamada, en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, controvierte el monto solicitado, atendida la naturaleza de la indemnización solicitada, considerando excesiva la suma, haciendo presente que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina



Foja: 1

cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, debiendo atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, siendo las cifras pretendidas en la demanda excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia.

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, ya que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por la demandante en su libelo, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse. Respecto de los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, por consiguiente, en el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y se condene al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.



Foja: 1

En virtud de todo lo anterior, solicita se rechace la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 20, con fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, dando por reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda. Además, destaca que la defensa fiscal si bien opone diversas excepciones y defensas, no contradice los hechos dañosos que constituyen crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de su representada, afirmando que de este modo se trata de sucesos no controvertidos entre las partes.

Añade que respecto a la excepción de pago o, como lo denomina la defensa fiscal, “reparación integral”, la que se la construye sobre la base de que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos habrían sido indemnizadas íntegramente, mediante reparaciones con transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y simbólicas de diverso tipo, considera que no es posible sostener que el conjunto de acciones listadas por la demandada pueda ser suficientes para estimar que no es procedente la acción civil para demandar los daños que concretamente haya sufrido la víctima, pues entre las unas y la otra existe una clara diferencia en cuanto a su naturaleza y forma de determinación. Precisa que las pensiones a las que han dado lugar las leyes citadas por la demandada constituyen prestaciones de carácter meramente asistencial destinadas a establecer condiciones de sobrevivencia mínimas, fijadas de forma unilateral por el Estado, para quienes resulten beneficiarios sin considerar de forma adecuada las particularidades que exhibe cada caso. Por su parte, la acción de indemnización de perjuicios por crímenes de lesa humanidad que se ventila en estos autos pretende que, en la mayor medida posible, cada una de las víctimas obtenga una reparación pecuniaria producto del daño sufrido a causa del actuar de agentes del Estado, la cual deberá ser determinada por tribunales establecidos para el efecto considerando especialmente las circunstancias que rodean a cada víctima.

Agrega que son las propias leyes que cita la contraparte las que se ocupan de zanjar el asunto de la compatibilidad entre las pensiones de que



Foja: 1

resultan beneficiarias las víctimas de violaciones a los derechos humanos y las acciones indemnizatorias como la presente, la Ley N°19.123 en su artículo 24 y la Ley N°19.992 en su artículo 4, por lo que sostener lo contrario estaría en contradicción con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, debido a que la tesis fiscal implicaría validar que el Congreso se haya avocado, en virtud de las disposiciones legales precitadas, al conocimiento y resolución de causas pendientes.

Atendido todo lo anterior, considera improcedente la excepción de pago o reparación integral que ha alegado su contradictor.

En lo relativo a la excepción de prescripción, aduce que la contraparte desconoce la naturaleza de la acción por la que se está demandando, que corresponde a una indemnización de perjuicios en contra del fisco por violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, que configura un típico caso de responsabilidad del Estado donde se requiere la aplicación de normas de carácter administrativo, constitucional e internacionales que permitan su adecuada comprensión y resolución, por cuanto sumir la tesis de la defensa fiscal implicaría consagrar la irresponsabilidad del Estado en esta materia, lo cual vulnera un principio básico del ordenamiento jurídico en su conjunto como es la responsabilidad.

Invoca el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que establece las bases de la responsabilidad del Estado, la cual queda complementada para el caso específico por normas propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, mencionando al respecto el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual da cuenta de un principio general del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como es la responsabilidad del Estado ante violaciones a los derechos humanos, la cual le impone la obligación de sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

En definitiva, estima que la aplicación de las normas de derecho privado, específicamente las reglas de prescripción resultan incompatibles con el conocimiento y resolución de un conflicto jurídico propio del Derecho Público, que por sus particularidades reclama ser juzgada desde la óptica del



Foja: 1

Derecho Internacional de los Derechos Humanos que constituye un sistema con sus principios propios.

En cuanto al cuestionamiento por el monto de lo demandado, señala que la normativa vigente exige presentar peticiones concretas, y además no existiendo dinero que supla el dolor experimentado por la demandante, existiendo además una petición subsidiaria en cuanto a que se condene a la suma que se estime ajustada a derecho, justicia y equidad, conforme el mérito de autos.

Pide se rechace los argumentos de hecho y derecho que la presentación de la contraria contiene, teniendo por establecida la responsabilidad del Estado de Chile, acogiendo la demanda de indemnización de perjuicios presentada.

A folio 22, con fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las alegaciones realizadas en el escrito de contestación de la demanda, solicitando se acojan las excepciones opuestas, declarando que se le niega lugar al libelo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 25, con fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que deberá recaer ésta.

A folio 68, con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, cumplida la medida para mejor resolver decretada por el Tribunal, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, comparecen los abogados Pablo Ubilla Eitel y Manuel Ubilla Eitel, en representación de doña Karin Alicia Eitel Villar, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, solicitando se le condene al demandado al pago de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos), por los daños sufridos como víctima de secuestro, tortura y prisión política por agentes del Estado.



Foja: 1

Funda su solicitud en las razones de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de la sentencia, las cuales se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que, con fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, comparece doña Ruth Israel López, abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, contestando la demanda por el Fisco de Chile, solicita el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por doña Karin Alicia Eitel Villar, en base a las excepciones, defensas y alegaciones relatadas en la parte expositiva de la sentencia, las que se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

TERCERO: Que, con fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, se recibió la causa a prueba, estableciéndose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1°. - Existencia, naturaleza y monto de los daños y perjuicios que habría sufrido Karin Alicia Eitel Villar a raíz del secuestro, tortura y prisión política de las que fue objeto por parte de agentes del Estado de Chile, entre el 2 de noviembre de 1987 y el 2 de agosto de 1991; 2°. - Reparaciones y beneficios que habría recibido la actora en virtud de la Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos.

CUARTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

I.- Documental: **1)** Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que establece que Karin Eitel Villar se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I; **2)** Informe VALECH (N°7664) de Karin Alicia Eitel Villar; **3)** Informe del Centro de Salud y Derechos Humanos CINTRAS de fecha 3 de mayo 2022; **4)** Informes de terapias psicológicas respecto de la demandante: a. Informe médico emitido con fecha 18 de marzo de 2022; b. Certificado médico emitido con fecha 22 de marzo de 2022; c. Certificado psicológico emitido por Germán del Solar; d. Certificado médico emitido con fecha 21 de marzo de 2022; **5)** Certificados profesionales de: Andrea Nitza González Gatica, Rodrigo Erazo Reyes, Rodrigo Erazo Reyes, Jaime Landa Gámez; **6)**



Foja: 1

Copia del certificado de título de German Andrés del Solar Segovia; **7)** Cadena de correos electrónicos enviados entre el año 2021 y 2022, entre los abogados de la demandante y funcionarios del Museo de la Memoria, en relación a la exhibición de las grabaciones relacionadas con Karin Eitel Villar a través de sus plataformas digitales; **8)** Capturas de pantalla efectuadas con fecha 2 de agosto de 2022, en los sitios electrónicos de Google y Youtube, con los primeros resultados que se arrojan al ingresar el nombre “Karin Eitel”; **9)** Secciones de artículos periodísticos en los cuales aparece el caso de Karin Eitel Villar; **10)** Estudio descriptivo de mortalidad en sobrevivientes de tortura y prisión política en el período de la dictadura militar en Chile, 1973-1990 elaborado por profesionales de diversas disciplinas y publicado por la Revista Médica de Chile el año 2020; **11)** Tres videos acompañados bajo apercibimiento del artículo 346 N°3 del citado Código Civil.

II.- Testimonial: **1)** Patricia Herrero Mediavilla, cédula nacional de identidad número 7.193.140-4.

QUINTO: Que, por su parte, la parte demandada no rindió prueba en el presente juicio.

SEXTO: Que, conforme el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, se agregó al proceso el siguiente documento: Oficio ORD.: DSGT N° 4792-5514, emitido por el Instituto de Previsión Social, respecto de los beneficios de reparación Leyes N°s 19.234, 19.992 y 20.874, emitido con fecha 22 de febrero de 2022.

SÉPTIMO: Que, no habiendo sido discutido por el Fisco de Chile los hechos en que se basa la demanda, los cuales además se ven refrendados por los elementos probatorios aportados al juicio, es posible tener por establecidos como hechos no controvertidos, los siguientes:

1.- Que doña Karin Alicia Eitel Villar, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue detenida ilegalmente por agentes del Estado de Chile el 2 de noviembre de 1987, a los 26 años de edad, en un domicilio ubicado en la comuna de Las Condes y trasladada al Cuartel Borgoño que funcionaba como centro de detención de la Central Nacional de Informaciones (CNI), lugar donde permaneció incomunicada y fue torturada por sus captores, sufriendo posteriormente privación de libertad hasta el 2 de agosto de 1991.



Foja: 1

2.- Que doña Karin Alicia Eitel Villar se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el Registro N° 7664.

OCTAVO: Que, a fin de acreditar el hecho a probar número uno fijado por el tribunal, esto es, la existencia, naturaleza y monto de los daños y perjuicios que habría sufrido Karin Alicia Eitel Villar a raíz del secuestro, tortura y prisión política de la que fue objeto por parte de agentes del Estado de Chile entre el 2 de noviembre de 1987 y el 2 de agosto de 1991, la demandante acompañó prueba instrumental y testimonial, la cual no fue objetada por la contraria y tuvo la aptitud para probar la existencia y naturaleza del daño moral provocado a la señora Eitel Villar a causa de la detención ilegal y encarcelamiento que sufrió durante la dictadura militar.

Es así como el certificado e informe de la Comisión Valech I junto con la serie de registros periodísticos dan cuenta de conductas por parte de agentes del Estado hacia doña Karin Alicia Eitel Villar constitutivas de torturas, como lo es la desnudez forzada, amenazas de violación, manoseos, amenazas de muerte a ella y familiares, reiterados y permanentes golpes en todo el cuerpo, especialmente en cabeza, cara y oídos, amarres y aplicación de corriente, incomunicación durante 35 días, entre otros, las cuales fueron desplegadas a fin de obtener información de la organización a la cual pertenecía la víctima y respecto del secuestro del coronel Carreño ocurrida en periodo cercano, siendo obligada a realizar declaraciones referente al mismo tema y filmada con una cámara de televisión mientras se encontraba privada de libertad, siendo transmitido por televisión abierta sin su consentimiento.

Aquellos acontecimientos implicaron para la demandante secuelas psicológicas como miedo, desconfianza, inseguridad, y secuelas físicas en su mandíbula, no pudiendo durante varios días abrir ni cerrar la boca, debido a que las articulaciones de la mandíbula y oídos las tenía paralizadas, tenía rigidez en la zona de la columna y las cervicales que le desesperaba, tenía un dolor de cabeza que no desaparecía y le causaban dolor las heridas en el cráneo, dando cuenta el certificado de daño psicológico emitido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos -CINTRAS- de 3 mayo de 2022, que el



Foja: 1

secuestro, detención, maltrato y tortura por parte de agentes del estado dejaron huellas profundas en el psiquismo de doña Karin Alicia Eitel Villar, quien como consecuencia de esa experiencia es portadora de trastorno de estrés post traumático complejo y trastorno del sueño crónico, además de graves secuelas psicológicas, sociales y morales, sometiéndose a numerosos tratamientos psicológicos y psiquiátricos para superar la depresión y el insomnio, conjuntamente con fármacos, tales como anti-depresivos, ansiolíticos y somníferos, que ha consumido durante las últimas tres décadas con la finalidad de acallar el dolor, teniendo que aprender a convivir con él, lo cual guarda correspondencia con los certificados médicos aportados que dan cuenta de las atenciones con médicos psiquiatras desde a lo menos el año 2000.

De las consecuencias negativas ocasionadas a la demandante por parte de las actuaciones realizadas por parte de agentes del Estado también da cuenta la testigo presentada en juicio por ésta, estimando verídica su declaración, exponiendo doña Patricia Herrero Mediavilla en juicio que ella también fue torturada, conociendo a la demandante en la cárcel, en un lugar inhóspito, sin luz natural, sin ventanas, donde debió estar detenida doña Karin Eitel durante 4 años, teniendo conocimiento que ese estado de cautiverio la llevó, cuando salió de la cárcel, a episodios de pánico, de poca comunicación en lo social, que tuvo una depresión que debió ser tratada y aún sigue siendo tratada, agregando que además ella la pasaba muy mal con la sobre exposición, lo que no ha logrado superar.

Respecto a lo último señalado por esta testigo, es preciso mencionar que se acompañaron una serie de correos electrónicos en donde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ante la solicitud realizada por un representante de la demandante, expone la importancia que los recursos periodísticos que mantienen en su poder respecto de la actora no afecten a las personas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, bajando la publicación de las redes sociales, quedando a disposición para la consulta, investigación, fines pedagógicos y de archivo, como todos los acervos que reúne el Museo y que han sido donados para contribuir con la reconstrucción de la memoria histórica, la reflexión y la promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, debiendo ser su uso por terceros, autorizados por



Foja: 1

TVN que es el donante, y en este caso en particular, para evitar revictimización, se deberá pedir autorización también a Karin Eitel a través de su representante.

NOVENO: Que, siendo el fundamento de la demanda la violación a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar, es preciso mencionar que el presente caso debe ser abordado desde la situación de conflicto que vivía el Estado de Chile durante aquél periodo, siendo de público conocimiento que acaecieron durante esta transición violaciones masivas a los derechos humanos, existiendo obligación por parte del Estado de Chile de reconocer y brindar una reparación íntegra en esta materia, toda vez que aquella obligación deriva de lo que prevé la actual Constitución Política de la República en sus artículos 5 y 6, los cuales incorporan a nuestro ordenamiento jurídico interno los principios generales del Derecho Internacional y la normativa de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes relativa a los derechos humanos, siendo un deber de los órganos del Estado descartar normas que sean contrarias a la Carta Fundamental.

Entre otras, las normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro sistema normativo interno está la Convención Americana de Derechos Humanos, desprendiéndose de sus artículos 1.1 y 63.1 la obligación del Estado de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada por una vulneración a los derechos y libertades por ella reconocidos, no pudiendo el Estado de Chile, conforme el artículo 27 de la Convención de Viena, desconocer esta obligación, sino que por el contrario, debe respetarlos y promoverlos, haciendo efectivo los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2.3^a, permite que “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo”, lo que supone buscar plena reparación, que es concordante con lo consagrado en el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho



Foja: 1

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

De esta forma, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos nace al momento en que con su actuar infringe los límites que señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de la persona, como la libertad o la integridad física y/o psíquica.

Finalmente mencionar que la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde en su artículo 3 dispone que la administración del Estado está a servicio de la persona humana, siendo su finalidad promover el bien común, y uno de los principios a los que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; siendo consecuente con ello el artículo 4 de la misma ley, que prescribe que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones (...)”, concordante con lo que dispone el artículo 38 de la Constitución Política de la República.

Todo lo anterior permite concluir que el daño causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad debe ser indemnizado por el Estado.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la denominada excepción de reparación integral opuesta por la demandada, por haber sido resarcida la actora conforme a la Ley N° 19.123, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, conforme al hecho a probar número dos fijados por el tribunal, esto es, reparaciones y beneficios que habría recibido la actora en virtud de la Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, cabe señalar que si bien consta en Ordinario N° 4792-5514, emitido por el Instituto de Previsión Social, que la señora Eitel Villar ha recibido un total beneficios concedidos en las Leyes N° 19.992 y 20.874 de \$33.350.638, teniendo una pensión actual Valech de \$207.774, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, rechazándose en definitiva esta excepción.

Aquello por cuanto las mencionadas leyes por el Fisco de Chile si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar



Foja: 1

el daño causado a víctimas de violaciones a los derechos humanos o a sus familiares directos, en modo alguno impiden ejercer el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado de obtener una indemnización distinta de una reparación de carácter meramente asistencial, que es lo que establecen las leyes aludidas, sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado de reparar el daño moral experimentado por aquellas víctimas, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional pero no incompatible.

A mayor abundamiento, cabe señalar que los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes N° 19.123, 19.980, 19.992, 20874, entre otras, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por el daño moral provocado por agentes del Estado, los que en ejercicio de su función pública, durante un período de extrema anormalidad institucional representando al gobierno de la época, abusaron claramente de su potestad y representación, dando lugar a los agravios a los derechos humanos de diversos conciudadanos que tenían una determinada visión política, cual es lo acontecido en la especie.

Por lo expuesto, parece también razonable que la reparación que haya hecho el Estado en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no puede dejar de considerarse al momento de determinar el monto de los perjuicios, ya que estas medidas tienen un efecto en la extensión del daño cuya indemnización ahora se demanda.

En definitiva, será rechazada la excepción de reparación integral opuesta por la parte demandada.

UNDÉCIMO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil, y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo cuerpo normativo.

Al efecto, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 5 de la Constitución Política de la República que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto



Foja: 1

a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, por cuanto esta disposición constitucional permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre los cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que entonces adquiere rango constitucional.

Teniendo presente lo anterior, y lo mencionado en la consideración novena, la prescripción extintiva de las acciones deducidas por la demandante no puede decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, toda vez que este cuerpo normativo busca regular las obligaciones que surgen para los sujetos por un concurso real de voluntades, un hecho voluntario de la persona que se obliga, un hecho que ha inferido daño o injuria a otra persona o por disposición de la ley, resolviendo situaciones de relativa equivalencia o de igualdad, mientras que el Estado, respecto de quienes habitan dentro de sus fronteras y quedan por ende sujetos a su jurisdicción, no actúa respecto de ellos en igualdad, se relaciona con las personas desde su posición de autoridad, como garante de los derechos fundamentales de que las personas son titulares.

Es por ello que el estatuto jurídico comprendido y conformado por el derecho común, de donde emana la norma de prescripción invocada por la demandada, resulta insuficiente para resolver acerca de la prescripción de las acciones que emanan del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, la acción indemnizatoria en tal caso queda de cargo de las normas que emanan del derecho internacional de derechos humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional.

Dado que no existe norma internacional expresa, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del



Foja: 1

Estado por delitos de lesa humanidad, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, como los ya mencionados, es posible concluir que ante las violaciones de derechos fundamentales, anteriores y superiores estos al Estado mismo, y nuestra Constitución, en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, garantizar y no discriminar, la aplicación que se haga del derecho interno a la luz de los tratados internacionales debe conducir a darles seguridad y eficaz protección a los derechos, reconociendo, declarando y potenciando la vigencia de éstos, debiendo por tanto el Estado cumplir con su obligación no solo de investigar y sancionar los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos, sino que reparar a las víctimas de aquellos en su integridad.

De esta manera, se concluye que la acción resarcitoria que nace de la comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible, de modo que siendo el hecho generador del daño que se invoca la violación de derechos humanos, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, de naturaleza meramente patrimonial, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto, los que deben primar por sobre las normas civiles internas.

Los razonamientos anteriores conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la parte demandada.

DUODÉCIMO: Que, descartadas las alegaciones realizadas por la demandada, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada, atendida la normativa mencionada y los hechos establecidos por parte del Tribunal.

En su libelo la parte demandante persigue la indemnización tanto del daño emergente como del daño moral, indicando respecto del primero que corresponde a los costos de honorarios de distintos profesionales que ha significado estar sometida durante treinta años y de forma ininterrumpida a diversos tratamientos de índole psicológica y psiquiátrica a causa de la tortura y prisión política, además de los fármacos prescritos por ellos; mientras que el segundo de los perjuicios manifiesta que corresponde al sufrimiento que le provocó la experiencia del secuestro, tortura y prisión política, los cuales



Foja: 1

superaron un mes y fueron objeto de múltiples acciones judiciales para hacerlas cesar, y más de 3 años de prisión política, teniendo a esa fecha 26 años, encontrándose estudiando idiomas en la Universidad Católica.

Respecto a la procedencia de la indemnización por el daño emergente, entendiendo éste como un empobrecimiento real y efectivo que sufre la persona en su patrimonio, no se aportó antecedente probatorio relativo a acreditar a la existencia cierta de aquél daño ni la cuantía del mismo, toda vez que los certificados médicos aportados si bien podrían permitir presumir aquel daño, al no establecer los mismos la pérdida pecuniaria exacta a la que ascienden los honorarios y/o medicamentos por el periodo que se alega, obstan a que el daño reclamado sea indemnizable, razón por la cual, al no haberse acreditado, será rechazada esta pretensión.

DÉCIMO TERCERO: Que, habiéndose establecido que el daño causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad debe ser indemnizado por el Estado, por tanto hace responsable al Estado, procede determinar la cuantía del daño moral que reclama la actora, toda vez que su existencia fue analizada en el considerando octavo.

El daño moral será entendido como una lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a las personas e imputable a otra.

En la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la libertad y la integridad física y psíquica a que fue sometida la demandante con motivo de su detención, tortura y prisión política por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, la angustia de temer por su vida, el hecho de hallarse en un estado de vulnerabilidad, el dolor, las amenazas y el daño físico y psíquico provocados, como se desprende de la prueba aportada al juicio, que importa un sufrimiento corporal y psíquico que se constituye como un dolor de la persona constitutivo de daño moral, el cual debe ser resarcido.

Lo anterior no puede sino ser analizado en su contexto, como se ha indicado, debido que es posible presumir que el temor ocasionado por las



Foja: 1

circunstancias de la época naturalmente incrementó dicha aflicción, siendo detenida la actora cuando era muy joven cuyas secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, truncando el normal desarrollo, debido al actuar ilegal llevado a cabo por agentes del Estado.

De esta manera, el daño moral ocasionado a la demandante no es sino una consecuencia inmediata y directa de la detención, torturas y prisión política cometida por agentes del Estado, secuelas psicológicas y emocionales que han permanecido a lo largo de los años.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, habiéndose determinado la existencia del daño moral sufrido por la demandante y la responsabilidad del Estado de indemnizar éste, corresponde fijar su cuantía en dinero, para lo cual el tribunal considerará el mérito de los antecedentes aportados al proceso, fijando el quantum indemnizatorio conforme a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, como la revictimización causada a causa de la exposición posterior de los hechos, lo que se hará prudencialmente, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, a fin de cumplir con el principio de reparación integral que rige en la materia.

Así las cosas, el tribunal regulará la cuantía del daño moral en la cantidad total de treinta millones de pesos (\$30.000.000).

DÉCIMO QUINTO: Que, la suma ordenada pagar deberá reajustarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; y, respecto de los intereses, estos se devengarán a partir de la fecha en que la parte demandada se constituya en mora.

DÉCIMO SEXTO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de



Foja: 1

Procedimiento Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derechos Humanos; y demás normas pertinentes, **se resuelve:**

I.- Que se **rechazan las excepciones** de reparación integral y prescripción deducidas por la parte demandada.

II.- Que se **acoge parcialmente la demanda**, interpuesta a folio 1, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de treinta millones de pesos (\$30.000.000) a favor de la demandante Karin Alicia Eitel Villar, con los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo sexto precedente; **rechazándose en cuanto al pago de daño emergente.**

III.- Que se exime del pago de las costas a la parte demandada.

Notifíquese por cédula a las partes.

Anótese, regístrese, consúltese si no se apelare, y archívese en su oportunidad.

ROL C-4714-2021

Dictada por doña Elizabeth Marlene Molina Gutiérrez, Jueza (S) del Séptimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticinco de Octubre de dos mil veintitrés.**

